

## MANIFIESTO CONTRA LAS MACROCARCELES NO AL NEGOCIO DE CRIMINALIZAR LA MARGINACIÓN



Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias declaraciones son muy claros: finalizar las 4 Macro-cárceles que están construyendo y aprobar la edificación de 8 nuevas, dos de ellas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. El costo de construcción de cada centro asciende a casi 100 millones de euros y el tamaño medio de los centros que se propone es de más de 1.000 plazas. En el caso de Navarra, ya se ha negociado su ubicación en el municipio de la capital. En cuanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco aparentemente las cosas no están aún tan atadas, pudiera ubicarse en Guipúzcoa o en Álava en el mismo municipio de Nanclares de la Oca.

Estos planes, no hacen sino asentar la apuesta por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas en un negocio que va desde la construcción de las infraestructuras, hasta la gestión y administración de los centros. Ni que decir tiene cuales son las consecuencias en las prisiones: incremento del número de personas presas y reproducción de las condiciones de encarcelamiento que traen consigo el hacinamiento, la enfermedad mental, violencia, muertes, suicidios, etcétera.

Es cierto que a la sociedad vasca se nos ha negado la capacidad de autogobierno en cuestiones tan claves como la gestión del sistema de ejecución penal, a pesar de tener competencias estatutarias en esta materia. Esto ha ocasionado que tengamos una gran mayoría de la población cumpliendo condenas en prisiones ubicadas fuera de nuestro territorio y que además contemos con unas políticas e infraestructuras obsoletas y deficitarias que no son capaces de garantizar la seguridad de la ciudadanía en general y de la población reclusa en particular.

Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la modernización de las respuestas frente al delito, y a la erradicación de la situación inhumana e ilegal que viven las personas encarceladas y sus familiares. Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía, en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y siempre, unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más Macro-cárceles.

Nos referimos, a medidas tales como la construcción de centros de inserción social de pequeño tamaño alternativos a los actuales centros cerrados, masificados y de gran tamaño; a la creación de centros socio-educativos y programas especializados para el tratamiento de drogodependientes, enfermos mentales o maltratados; a la creación de unidades hospitalarias extra-penitencias y de servicios socio-sanitarios para personas con enfermedades infecciosas, mentales y patologías duales; al cumplimiento de las condenas en los lugares de residencia habitual donde la persona tiene arraigo social; a la limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio, al desarrollo de programas de apoyo social y laboral a la salida de prisión, etcétera.

No nos olvidemos además del importante reto de fondo: desarrollar a medio y largo plazo alternativas a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la "justicia penal": arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.

Para ello resulta imprescindible la *paralización inmediata de los planes de edificación de Macro-cárceles* por que no son necesarios más depósitos de personas abandonadas, sino el desarrollo de un sistema de prevención y lucha contra el delito alternativo al negocio del encarcelamiento de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, un negocio subvencionado con dinero público, del que se benefician empresas privadas y particulares, y que tan solo contribuye a reproducir la inseguridad ciudadana.